

DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN

Concepto No: 20118010134351

Bogotá D.C., lunes, 28 de febrero de 2011

Doctor

JOSÉ DE JESÚS GONZÁLEZ ALARCÓN

Secretario General

Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca

CRA.7 No.36-45

Bogotá - D. C.

Asunto: Consulta relacionada con el régimen contractual de la Banca Multilateral

Respetado doctor González:

Por medio del presente oficio damos respuesta a su consulta No. 20116630023622 en la cual pregunta por el deber legal de reportar la información de sanciones contractuales al Registro Único de Proponentes y de liquidación de contratos, en ambos casos, celebrados por entidades estatales pero sometidos al régimen contractual de los Bancos Multilaterales.

Como punto inicial, cabe aclarar que el Departamento Nacional de Planeación según las funciones atribuidas por el Decreto 3517 de 2009 y los documentos Conpes 3248 y 3249 de 2003, tiene limitada su competencia en materia de Contratación Pública a la orientación y el seguimiento del proceso de implementación de la estrategia transversal de reforma a la contratación pública; la cual tiene como eje la formulación de una Política Pública en la materia, que se base en la lucha contra la corrupción y en la búsqueda de la eficiencia en la ejecución de los recursos públicos.

No obstante lo anterior, haremos una breve exposición de la normatividad que rige la materia desde una perspectiva en abstracto para que adopte las decisiones que considere más conducentes conforme la situación particular y concreta que corresponda.

I. Registro Único de Proponentes - RUP 1. Sobre el RUP

Una de las principales reformas introducidas a la Contratación Pública, fue la verificación de las condiciones de los proponentes por parte del Registro Único de Proponentes (artículos 5 y 6 de la Ley 1150 de 2007).

Dicho Registro, **contiene la información de quienes aspiran a celebrar contratos con las entidades estatales**, de conformidad con el artículo 6° de la Ley 1150 de 2007, mediante la calificación y clasificación que cada interesado realiza al momento de su inscripción, renovación o actualización, aportando la documentación que se exige y que es objeto de verificación documental por parte de la Cámara de Comercio respectiva.

De acuerdo con la norma mencionada, es obligación de los proponentes calificarse y clasificarse en el RUP de conformidad con los documentos que se aporten para el efecto,

pues son éstos y no otros quienes tienen el interés directo de ser clasificados y calificados conforme su área de interés y de trabajo. A su vez, las Cámaras de Comercio tienen la obligación ya no solo de certificar sino también de verificar documentalmente la información presentada por los interesados al momento de inscribirse en el registro, cuya certificación constituye plena prueba de las circunstancias que en ella se hagan constar.

Asimismo, el artículo 6 de la Ley 1150 de 2007, **contiene información referente a los contratos, multas y sanciones de los inscritos**, para tal efecto, las "entidades estatales enviarán mensualmente a la Cámara de Comercio de su domicilio, la información concerniente a los contratos, su cuantía, cumplimiento, multas y sanciones relacionadas con los contratos que hayan sido adjudicados, los que se encuentren en ejecución y los ejecutados" (Negritas fuera de texto).

Este Registro, fue reglamentado por medio del Decreto 1464 de 2010, *"por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 1150 de 2007 en relación con la verificación de las condiciones de los proponentes y su acreditación para el Registro Único de Proponentes a cargo de las Cámaras de Comercio y se dictan otras disposiciones"*.

2. Excepción de la exigencia de la inscripción en el RUP

Si bien es cierto que la inscripción en el Registro Único de Proponentes es necesaria para aspirar a celebrar contratos con las entidades sometidas al Estatuto General de Contratación de la Administración Pública, el artículo 6 de la Ley 1150 de 2007 exceptúa de esta inscripción a los proponentes que aspiren a los siguientes contratos:

1. Contratación directa;
2. Contratos para la prestación de servicios de salud;
3. Contratos cuyo valor no supere el diez por ciento (10%) de la menor cuantía de la respectiva entidad;
4. Enajenación de bienes del Estado;
5. Contratos que tengan por objeto la adquisición de productos de origen o destinación agropecuaria que se ofrezcan en bolsas de productos legalmente constituidas;
6. Actos y contratos que tengan por objeto directo las actividades comerciales e industriales propias de las empresas industriales y comerciales del Estado y las sociedades de economía mixta; y,
7. Contratos de concesión de cualquier índole.

En los casos anteriormente señalados, corresponderá a las entidades contratantes cumplir con la labor de verificación de las condiciones habilitantes de los proponentes.

Dicho lo anterior, la exclusión del registro, se hace en relación el tipo de contrato a celebrar más no, en relación al proponente, quien puede o no estar inscrito en el Registro Único de Proponentes.

3. De la información sobre contratos, multas y sanciones a los inscritos

Además de la inscripción en el Registro Único de Proponentes, el artículo 6° de la Ley 1150 de 2007 contiene disposiciones relativas a la calificación y clasificación de los inscritos; información sobre contratos, multas y sanciones a los inscritos; la impugnación de la calificación y clasificación; entre otras disposiciones.

En relación a la información sobre contratos, multas y sanciones, el numeral 6.2., del artículo 6 de la Ley 1150 de 2007 establece que:

"Las entidades estatales enviarán mensualmente a la Cámara de Comercio de su domicilio, la información concerniente a los contratos, su cuantía, cumplimiento, multas y sanciones relacionadas con los contratos que hayan sido adjudicados, los que se encuentren en ejecución y los ejecutados.

"Las condiciones de remisión de la información y los plazos de permanencia de la misma en el registro serán señalados por el Gobierno Nacional.

"El servidor público encargado de remitir la información, que incumpla esta obligación incurrirá en causal de mala conducta".

Por su parte, el artículo 14 del Decreto 1464 de 2010, respecto de la información proveniente de las entidades estatales, establece que:

*"Las entidades estatales deberán remitir por medios electrónicos a la cámara de comercio que tenga jurisdicción en el lugar del domicilio del inscrito, a más tardar el quince de cada mes, la siguiente información que le corresponda a aquel, sobre **contratos que le hayan sido adjudicados, o tenga en ejecución y ejecutados, multas y sanciones en firme:***

"a. Código de la cámara de comercio;

"b. Fecha de reporte;

"c. NIT;

"d. Nombre de la entidad oficial;

"e. Código de la ciudad o municipio;

"f. Dirección de la entidad oficial que reporta la información;

"g. Nombre del funcionario;

"h. Cargo del funcionario que reporta la información;

"i. Número de inscripción del proponente;

"j. Número de identificación del proponente;

"k. Nombre del proponente;

"l. Número de contrato;

"m. Fecha de adjudicación del contrato

"n. Fecha de iniciación del contrato;

"o. Fecha de terminación del contrato; `p. Clasificación del contrato;

"q. Indicador de cumplimiento;

"r. Cuantía del contrato;

"s. Valor de la multa;

"t. Descripción de la sanción;

"u. Identificación del acto administrativo que impone la sanción o la multa; y

"v. **Fecha** del acto administrativo que impone la sanción, multa o cláusula penal pecuniaria.

"Dentro de la información que las entidades estatales deben suministrar a la cámara de comercio que tenga **jurisdicción** en el lugar del domicilio del inscrito, está la concerniente con las multas pagadas y las sanciones cumplidas o revocadas. La certificación de esta información sólo podrá ser modificada por orden de la entidad estatal que haya suministrado la información o por providencia ejecutoriada de autoridad judicial competente. En todo caso, la información sobre multas y sanciones se mantendrá en el registro hasta por cinco (5) años contados a partir de su reporte. En consecuencia, una vez reportado el acto administrativo mediante el cual se impuso multa o sanción al inscrito, y habiendo cumplido cinco (5) años desde la fecha en que se registró en la cámara de comercio, ésta lo debe eliminar del certificado automáticamente.

"El servidor público encargado de remitir la información que incumpla esta obligación incurrirá en causal de mala conducta, de acuerdo con lo establecido en el artículo 6.2 de la Ley 1150 de 2007.

"La información reportada por las entidades del Estado sobre multas o sanciones impuestas a los proponentes inscritos en el RUP, así como multas pagadas y las sanciones cumplidas o revocadas deberá también ser publicada mensualmente en la página del Registro Único Empresarial - RUE y en la del Programa Presidencial de Modernización, Eficiencia, Transparencia y Lucha contra la Corrupción y deberá ser accesible a todas las personas o entidades interesadas en consultarla.

"Parágrafo 1. La Superintendencia de Industria y Comercio determinará a través de circular, las especificaciones técnicas para el reporte electrónico de información que las entidades estatales están obligadas a suministrar las cámaras de comercio sobre contratos en ejecución, multas y sanciones de los inscritos.

"Parágrafo 2. La información remitida por las entidades estatales en virtud del presente artículo, no será verificada por las cámaras de comercio. Por lo tanto las controversias respecto de la información remitida por las entidades estatales, deberán surtirse ante la entidad estatal correspondiente y no podrán debatirse ante las cámaras de comercio.

"Las cámaras no certificarán la información remitida por las entidades estatales relativa a los contratos adjudicados y ejecutados; la cual tampoco será tomada en cuenta como documentos sujetos a verificación documental.

"Parágrafo 3. Para la remisión de la información a la cámara de comercio que corresponda, las entidades estatales deberán verificar en el Registro Único Empresarial el número de inscripción y la cámara de comercio competente por jurisdicción que corresponda al contratista sobre el cual reportan información.

"Parágrafo 4. A más tardar el 31 de mayo de 2010, las entidades públicas informarán a las cámaras de comercio, de acuerdo con la instrucción que reciban de la Superintendencia de Industria y Comercio, sobre multas y sanciones impuestas a contratistas que no estaban obligados a inscribirse en el Registro Único de Proponentes antes del 16 de enero de 2009. La Entidad Estatal realizará el reporte a las cámaras de comercio que tengan jurisdicción en el lugar del domicilio del inscrito. Se deberá reportar la información de los últimos cinco (5) años contados a partir de la entrada en vigencia de la presente norma.

"Parágrafo transitorio. Las Entidades Estatales deberán reportar la información de que trata el inciso primero del presente artículo, correspondiente al periodo comprendido entre el 11° de enero del 2009 al 30 de abril de 2010 a más tardar el 31 de mayo de 2010. A partir de esta fecha se reportará mensualmente la información correspondiente al mes inmediatamente anterior en los términos previstos en el presente decreto.

"En todo caso las Cámaras de Comercio registrarán la información que sea remitida con posterioridad a las fechas establecidas en este artículo". (Negritas fuera de texto)

Dicho lo anterior, el Registro Único de Proponentes, además de servir para la "verificación de la información contenida en el registro, a efecto de que esta sea la fuente de las entidades para la verificación de la capacidad jurídica del proponente y de las condiciones referidas a su [experiencia y] capacidad [...] operacional y financiera, con el objeto de que la valoración de las propuestas de las entidades se centre en los aspectos técnicos y económicos"; contiene información relativa a los contratos, multas y sanciones de los inscritos en dicho Registro, la cual además de servir con los propósitos propios del Registro Único de Proponentes, permite el fortalecimiento de los escenarios de transparencia en la Contratación Pública. En este sentido, debe diferenciarse la exigibilidad del Registro Único de Proponentes (artículo 4 del Decreto 1464 de 2010); del reporte que deben enviar las Entidades Estatales a las Cámaras de Comercio (artículo 14 del Decreto 1464 de 2010).

Siendo así, el reporte que deben enviar las Entidades Estatales a las Cámaras de Comercio (artículo 14 del Decreto 1464 de 2010), contiene la información de los contratos adjudicados, en ejecución, y ejecutados, así como las multas y sanciones en firme; **incluyendo la información de la ejecución de los contratos en los cuales no se requiere la inscripción del proponente en el RUP.**

En este sentido, y en atención a su consulta, el reporte que deben enviar las Entidades Estatales a las Cámaras de Comercio —al incluir la información de los contratos en los cuales no se requiere la inscripción del proponente en el RUP— incluye todos los contratos celebrados; quedando excluidos de dicho reporte, **únicamente**, los relacionados con contratistas que no se encuentren inscritos en el Registro Único de Proponentes o cuando el contrato respectivo NO se encuentra sometido al Estatuto de Contratación Colombiano.

Sin perjuicio de lo anterior, nada obsta para que las Entidades Públicas, en virtud de su libre autonomía y en desarrollo del principio de publicidad, **informen al RUP de las sanciones impuestas a los contratistas en desarrollo de un régimen contractual distinto al del Estatuto de contratación colombiano.**

II. Liquidación de Contratos

Respecto de la liquidación de los contratos, es claro el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública al establecer en el artículo 60 de la Ley 80 de 1993 que *"los contratos de tracto sucesivo, aquellos cuya ejecución o cumplimiento se prolongue en el tiempo y los demás que lo requieran, serán objeto de liquidación".*

En vista de lo anterior, se debe proceder a la liquidación del contrato que así lo requiera, de *"mutuo acuerdo dentro del término fijado en los pliegos de condiciones o sus equivalentes, o dentro del que acuerden las partes para el efecto"* según lo dispuesto en el artículo 11 de la Ley 1150 de 2007.

De no existir tal término, dispone la norma en mención, la liquidación se realizará dentro de los cuatro (4) meses siguientes a la expiración del término previsto para la ejecución del contrato o a la expedición del acto administrativo que ordene la terminación, o a la fecha del acuerdo que la disponga. En caso de no arribarse a la liquidación de mutuo acuerdo, el

artículo 11 de la Ley 1150 de 2007 señala que se podrá realizar unilateralmente dentro de los 2 meses siguientes al término indicado para hacerla voluntaria. En todo caso podrá realizarse dentro de los 2 años siguientes a la fecha en que hubiere vencido el término para hacerla, periodo dentro del cual, podrá surtirse de común acuerdo o unilateralmente.

III. Régimen contractual de contratos financiados con recursos de Organismos Internacionales 1. Estatuto General de Contratación de la Administración Pública

El Estatuto General de Contratación de la Administración Pública — Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007 y sus Decretos Reglamentarios — establece como regla general la sujeción a dicho estatuto por parte de las entidades estatales, quienes deberán realizar sus procesos contractuales en atención a sus disposiciones.

Así, el artículo 2° de la Ley 80 de 1993 define las entidades estatales, servidores y servicios públicos, para efectos de la aplicación del Estatuto General de Contratación de la Administración Pública.

En este sentido, se encuentran sometidos a dicho Estatuto, las entidades estatales indicadas en el numeral 1 de este artículo; quienes deberán adelantar sus procedimientos contractuales mediante la licitación pública, la selección abreviada, el concurso de méritos y la contratación directa, siendo la licitación pública a su vez, la regla general, según lo dispuesto en el artículo 2 de la Ley 1150 de 2007.

Por su parte, la Ley 1150 de 2007 —por medio de la cual se introducen medidas para la eficiencia y la transparencia en la Ley 80 de 1993 y se dictan otras disposiciones generales sobre la contratación con recursos públicos— sometió también al Estatuto General de Contratación de la Administración Pública a las cooperativas y asociaciones de entidades territoriales (artículo 10), a las Empresas Industriales y Comerciales del Estado, las Sociedades de Economía Mixta, sus filiales y empresas con participación mayoritaria del Estado en los términos allí previstos (artículo 14), a las Corporaciones Autónomas Regionales (artículo 24), y al Fondo Financiero de Proyectos de Desarrollo —Fonade— (artículo 26), y, frente a las entidades no sometidas al Estatuto General de Contratación, estableció unos principios generales que deben atender en el desarrollo de su actividad contractual (artículos 13 y 15).

Asimismo, se encuentran exceptuadas de dicho Estatuto General únicamente las entidades que por medio de la Ley, tengan regímenes excepcionales, los cuales en todo caso, deben someterse a los principios de los la función administrativa y de la gestión fiscal de que tratan los artículos 209 y 267 de la Constitución Política, referidos a la igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad, publicidad, equidad y valoración de los costos ambientales.

Por último, se hace necesario tener en cuenta la existencia de reglas particulares respecto de la contratación con organismos internacionales, las cuales determinan la legislación aplicable a los procesos contractuales que se deriven de los Convenios o Contratos respectivos.

2. Régimen contractual aplicable a la contratación con organismos internacionales

La normatividad aplicable a la contratación con recursos de cooperación internacional y de organismos internacionales por parte de las entidades sometidas al Estatuto General de Contratación de la Administración Pública, se rige por el artículo 20 de la Ley 1150 de 2007.

En este sentido, dicho artículo preceptúa que:

"Los contratos o convenios financiados en su totalidad o en sumas iguales o superiores al cincuenta por ciento (50%) con fondos de los organismos de cooperación, asistencia o ayudas internacionales, podrán someterse a los reglamentos de tales entidades. En caso contrario, se someterán a los procedimientos establecidos en la Ley 80 de 1993. Los recursos de contrapartida vinculados a estas operaciones podrán tener el mismo tratamiento.

"Los contratos o convenios celebrados con personas extranjeras de derecho público u organismos de derecho internacional cuyo objeto sea el desarrollo de programas de promoción, prevención y atención en salud; contratos y convenios necesarios para la operación de la OIT; contratos y convenios que se ejecuten en desarrollo del sistema integrado de monitoreo de cultivos ilícitos; contratos y convenios para la operación del programa mundial de alimentos; contratos y convenios para el desarrollo de programas de apoyo educativo a población desplazada y vulnerable adelantados por la Unesco y la OIM; los contratos o convenios financiados con fondos de los organismos multilaterales de crédito v entes gubernamentales extranjeros, podrán someterse a los reglamentos de tales entidades.

"Las entidades estatales no podrán celebrar contratos o convenios para la administración o gerencia de sus recursos propios o de aquellos que les asignen los presupuestos públicos, con organismos de cooperación, asistencia o ayuda internacional.

"PARÁGRAFO 1o. Los contratos o acuerdos celebrados con personas extranjeras de derecho público, podrán someterse a las reglas de tales organismos.

"PARÁGRAFO 2o. Las entidades estatales tendrán la obligación de reportar la información a los organismos de control y al Secop relativa a la ejecución de los contratos a los que se refiere el presente artículo.

"PARÁGRAFO 3o. En todo Proyecto de cooperación que involucre recursos estatales se deberán cuantificar en moneda nacional, los aportes en especie de la entidad, organización o persona cooperante, así como los del ente nacional colombiano. Las contralorías ejercerán el control fiscal sobre los proyectos y contratos celebrados con organismos multilaterales". (Subraya fuera de texto)

Por su parte, el artículo 85 del Decreto 2474 de 2008, establece que:

"Los contratos o convenios financiados en su totalidad o en sumas iguales o superiores al cincuenta por ciento (50%) con fondos de los organismos de cooperación, asistencia o ayudas internacionales, podrán someterse a los reglamentos de tales entidades. En caso contrario, los contratos o convenios que se celebren con recursos públicos de origen nacional se someterán a los procedimientos establecidos en el Estatuto General de la Contratación Pública.

"En el evento en que el monto del aporte de fuente nacional o internacional se modifique o cuando la ejecución efectiva de los aportes no se realice en los términos inicialmente pactados, las entidades estatales deberán modificar los contratos o convenios, de tal manera que se dé cumplimiento a lo establecido en el inciso anterior.

"Los recursos que se generen en desarrollo de los contratos o convenios financiados con fondos de los organismos de cooperación, asistencia o ayudas internacionales a los cuales hace referencia el inciso 1° del presente artículo no computarán para efectos de determinar los porcentajes allí dispuestos.

"Los contratos o convenios financiados con fondos de los organismos multilaterales de crédito, entes gubernamentales extranjeros o personas extranjeras de derecho público, así como aquellos a los que se refiere el inciso 2° del artículo 20 de la Ley 1150 de 2007, se ejecutarán de conformidad con lo establecido en los tratados internacionales marco y complementarios, y en los

convenios celebrados, o sus reglamentos, según sea el caso.

"En los demás casos, los contratos o convenios en ejecución al momento de entrar en vigencia la Ley 1150 de 2007 continuarán rigiéndose por las normas vigentes al momento de su celebración hasta su liquidación, sin que sea posible adicionarlos ni prorrogarlos.

"Parágrafo. *Los convenios a que hace referencia el presente artículo deberán tener relación directa con el objeto del organismo de cooperación, asistencia o ayuda internacional que se contemple en su reglamento o norma de creación".*

De éste marco normativo, es posible identificar la existencia de dos hipótesis diferentes, las cuales han de determinar la normativa aplicable a la contratación con recursos de organismos internacionales, así, se remite al Estatuto General de Contratación de la Administración Pública; o, a los Tratados Internacionales Marco y Complementarios; Convenios celebrados; o, Reglamentos de los Organismos Internacionales, según sea el caso.

En este sentido, se encuentran sometidos de forma obligatoria al Estatuto General de Contratación de la Administración Pública, todos los **contratos o convenios financiados en sumas inferiores al 50% con fondos de organismos de cooperación, asistencia o ayudas internacionales.**

Por su parte, se **pueden** someter a la reglamentación contenida en los Tratados Internacionales Marco y Complementarios; Convenios celebrados; o, Reglamentos de los Organismos Internacionales, según sea el caso:

1. Los contratos o convenios financiados en su totalidad o en sumas iguales o superiores al 50% con fondos de organismos de cooperación, asistencia o ayudas internacionales;
2. Los contratos o convenios celebrados con personas extranjeras de derecho público u organismos de derecho internacional cuyo objeto sea el desarrollo de programas de promoción, prevención y atención en salud;
3. Los contratos y convenios necesarios para la operación de la OIT;
4. Los contratos y convenios ejecutados en desarrollo del sistema integrado de monitoreo de cultivos;
5. Los contratos y convenios para la operación del programa mundial de alimentos;
6. Los contratos y convenios para el desarrollo de programas de apoyo educativo a población desplazada y vulnerable adelantados por la Unesco y la OIM;
7. Los contratos o convenios financiados con fondos de organismos multilaterales de crédito y entes gubernamentales extranjeros; y,
8. Los contratos o acuerdos celebrados con personas extranjeras de derecho público.

Por último, respecto al régimen aplicable a los **recursos de aporte de fuente nacional del respectivo convenio o contrato**, el Decreto 1896 de 2004 modificado por el Decreto 2166 de 2004 establece lo siguiente:

"Artículo 1°. El artículo 1° del Decreto 1896 de 2004 quedará así:

"Los contratos o convenios financiados con recursos provenientes de empréstito y donación celebrados con organismos multilaterales de crédito, personas extranjeras de derecho público u

organismos de cooperación, asistencia o ayuda internacionales, podrán someterse a los reglamentos de tales entidades en todo lo relacionado con procedimientos de formación, adjudicación y cláusulas especiales de ejecución, cumplimiento, pago y ajustes.

"El mismo tratamiento se dará a los recursos de contrapartida vinculados a estas operaciones." (Negritas fura de texto)

En vista de lo anterior, es claro que los aportes de fuente nacional en los proyectos descritos en las hipótesis contenidas en el artículo 20 de la Ley 1150 de 2007, tendrán el mismo régimen contractual que se de a los aportes internacionales, conforme se establezca en los Tratados Internacionales Marco y Complementarios; Convenios celebrados; o, Reglamentos de los Organismos Internacionales, según sea el caso.

Para una mayor ilustración y entendimiento de este asunto, a continuación expondremos sintéticamente la forma como debe ser entendida la contratación con Organismos Internacionales, así:

Contratación con Organismos Internacionales

Estatuto General de Contratación de la
Administración Pública

Tratados Internacionales Marco y
Complementarios; Convenios; o, Reglamentos de
Organismos Internacionales

Contratos o
convenios
financiados en
sumas inferiores
al 50% con
fondos de
organismos de
cooperación,
asistencia o
ayudas
internacionales

Aportes de
Fuente Nacional
cuando NO se
haya dispuesto lo
contrario en los
Tratados
Internacionales
Marco y
Complementarios;
Convenios; o,
Reglamentos de
Organismos
Internacionales

Aportes de
Organismos
Internacionales y
Aportes de Fuente
Nacional vinculados a
tales operaciones a
través de los
respectivos Tratados
Internacionales
Marco y
Complementarios;
Convenios; o,
Reglamentos de
Organismos
Internacionales

Inciso 2.
Artículo 20,
Ley 1150
de 2007

Parágrafo 1,
artículo 20,
Ley 1150 de
2007



IV Conclusiones Finales

A la primera pregunta relacionada con:

¿En un contrato celebrado bajo normas y políticas de organismos multilaterales y financiados con recursos de los mismos, en caso de declaratoria de incumplimiento y terminación del contrato, esta sanción debe ser reportada a la Cámara de Comercio de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 6 numeral 6.2 de la Ley 1150 de 2007?

Se responde:

- No es obligación reportarla porque el contrato incumplido no está sometido al régimen del Estatuto de Contratación colombiano sino al de la Banca Multilateral que corresponde al de un organismo internacional. No obstante lo anterior, nada obsta para que las entidades puedan reportar esa información a la Cámara de Comercio donde se encuentre registrado el contratista con el fin de dar publicidad y coadyuvar a la administración pública en reportar la información de contratistas incumplidos.

A la segunda pregunta relacionada con:

¿Es necesaria y obligatoria la liquidación de un contrato, cuya formación, celebración y ejecución se sujetó a políticas y procedimientos de organismos multilaterales de crédito, luego de haberse declarado el incumplimiento total y su terminación? En caso afirmativo, ¿cuál sería el procedimiento para ello?

Se responde:

- Teniendo en cuenta que el procedimiento liquidatorio es obligatorio para los contratos sometidos al estatuto de Contratación colombiano de tracto sucesivo y para aquellos que lo requieran, la liquidación para los demás contratos deberá consultar la normatividad aplicable en cada caso. No obstante lo anterior, nada obsta para que en virtud del principio de autonomía de la voluntad, la administración en acuerdo con el contratista convenga en liquidar las relaciones contractuales respectivas.

Conforme a lo establecido en el artículo 230 de la Constitución Política y el artículo 25 del Código Contencioso Administrativo, las respuestas dadas por esta entidad a las consultas que se elevan, no comprometen su responsabilidad ni son de obligatorio cumplimiento o ejecución; por lo tanto, es deber del interesado evaluar las opiniones jurídicas consignadas en los conceptos, sopesarlas a la luz de la normatividad y jurisprudencia, aplicables en la materia, y asumir su propia posición, conforme al grado de análisis y convencimiento adquirido.

Cualquier aclaración con gusto la atenderemos.

Atentamente,

JUAN PABLO GIRALDO OSPINO

Director (E) Programa de Renovación de la Administración Pública

